

y, de hecho, Calviño optó por ponerse la venda antes de la herida. En su discurso reconoció «ser consciente» de que otros sectores aparte de los directamente beneficiados por el decreto «están pasándolo mal», pero se escudó en «criterios objetivos» del impacto de la pandemia. Entre la oposición, una de las palabras que más se escucharon en la Cámara Baja fue «responsabilidad», a la que se agarraron muchos grupos para justificar su abstención y hasta su apoyo.

Desde las filas populares, la diputada Elvira Rodríguez defendió que votaban abstención por «responsabilidad» a pesar del «retraso» del decreto, que «deja fuera a muchos sectores» y que establece un «trámite complejo» para que las comunidades canalicen

las ayudas. «Únicamente 95 de las 538 ramas de actividad podrán recibir ayudas directas: 355.713 empresas de 2,2 millones y uno de cada tres autónomos», se lamentó.

Muy duro se mostró el PNV. Su diputada Idoia Sagastizábal afeó al Ejecutivo su falta de negociación y su estrategia de colocar a los grupos ante «la disyuntiva del todo o nada». Otro de los grandes apoyos parlamentarios del Gobierno, ERC, le afeó tanto los tiempos como el fondo de la norma, aunque también ha tirado de «responsabilidad» para argumentar su 'sí'. «Llega tarde y mal», dijo el diputado Joan Capdevila, que destacó que la norma se aprueba un año después de que estallara la crisis y tras «presiones por todos los lados».